

ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO

---

# INFORME DE COYUNTURA

## Enero - Agosto 2016

Guillermo Rozenwurcel  
Investigador principal del Area de Desarrollo Económico de CIPPEC

Septiembre 2016

## Cable rojo o cable azul: el dilema de desactivar la inflación

El gobierno de Mauricio Macri inició su gestión económica con una excelente largada. El diagnóstico sobre los problemas a resolver era adecuado: para volver a crecer sostenidamente había que evitar que las tensiones inflacionarias y de escasez de divisas dominen la escena, y se necesitaba, además, cambiar las fuentes del crecimiento desde el consumo hacia la inversión y las exportaciones. Los primeros pasos en esa dirección involucraron tres objetivos de política: romper con la dominancia fiscal, recuperar competitividad externa y acceder nuevamente a los mercados financieros internacionales.

Sobre el atraso cambiario, la política de unificación cambiaria y devaluación del peso también fue inicialmente en el sentido correcto: según el BCRA, entre comienzos de diciembre y marzo, el tipo de cambio real multilateral (que, aunque imperfectamente, refleja la competitividad externa) se depreció aproximadamente un 45%. Adicionalmente, la solución del conflicto con los holdouts abrió las puertas para la recuperación del crédito externo. En cuanto a la desactivación de los mecanismos de la dominancia fiscal, un paso crucial era corregir el atraso tarifario. Las políticas anunciadas por el gobierno en materia de ajuste de tarifas eléctricas y de transporte fueron en ese sentido: de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), en el primer trimestre de 2016 los subsidios económicos se redujeron un 21% en términos nominales.

Sin embargo, el gobierno no logró evitar que el traslado (pass through) de la devaluación a precios desatase una espiral de aumentos de precios y salarios. Para colmo, los reajustes preventivos de precios habían comenzado antes de la devaluación, no sólo en bienes transables sino también en no transables (cuyos costos no están ligados al tipo de cambio). Esto y el impacto directo del aumento del tipo de cambio nominal producto del levantamiento del cepo elevaron de manera considerable el ritmo de inflación por encima de los registros observados al final del gobierno precedente, incluso antes de que comenzaran las negociaciones paritarias y que se concretara el reajuste de tarifas.

Por otra parte, la fuerte desaceleración de la economía china, la retracción del comercio mundial, el fin del superciclo de precios altos de las commodities y la “guerra” de devaluaciones competitivas en las economías emergentes conspiró contra las mejoras de competitividad perseguidas por la devaluación del peso. La decisión de mantener el precio interno del barril de petróleo en US\$ 65, evitando el ajuste a los precios internacionales que cayeron en picada y hoy se ubican en torno a US\$40/45 sin perspectivas de mejora a mediano plazo, tampoco contribuyó a la competitividad de nuestra economía.

## La distribución de costos de la política de estabilización

Todo esto pone en evidencia que con una percepción correcta de las condiciones iniciales y un primer conjunto de medidas no basta. Las políticas de corrección de precios relativos son costosas en términos sociales, y la economía política detrás de la distribución de costos es compleja. O, bien mirada, es sencilla: nadie quiere pagar el ajuste. Por esa razón, a pesar de que en materia social se adoptó un conjunto importante de medidas bien direccionadas, el gobierno no logró reducir los costos y las fricciones del ajuste, tanto en la macroeconomía como para los sectores más vulnerables.

Con respecto a los costos sociales, la elevación de la tasa de pobreza –del 29% a fines de 2015 a 34.5% en marzo de 2016, de acuerdo al Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina- es sólo una faceta de un nuevo conjunto de riesgos para los más vulnerables que tienen su nudo en el mercado de trabajo. Una parte del trabajo formal está, además, en la franja de vulnerabilidad. No debe sorprender: las correcciones de precios relativos dispuestas implicaron que los salarios se atrasasen en relación a las tarifas y al tipo de cambio. Para amortiguar esos costos haría falta una política de ingresos.

Con respecto a la macroeconomía, el problema es mayúsculo: si la historia argentina sirve de guía, una corrección de precios relativos de la magnitud que hoy hace falta fue, en el pasado, sistemáticamente incompatible en el corto plazo con una inflación en baja y una economía no recesiva. El gobierno subestimó el problema inflacionario pensando que era sólo cuestión de anuncios y política monetaria consistente. En otras palabras, falló en su diagnóstico al ignorar que la dinámica inflacionaria argentina es una combinación de inercia (que pone un piso a la inflación) más shocks de precios relativos (que si son al alza, como los inducidos por las medidas del propio gobierno, tienden a acelerarla).

## El “trilema” de la política de estabilización y los errores de diagnóstico

En otras palabras, la política de estabilización lidia con un problema de “sobre-determinación”. Con dominancia fiscal (esto es, con una política fiscal que, independientemente de su enfoque gradualista, no logra alcanzar consistencia y limita la efectividad de la política monetaria) y mercados financieros domésticos poco profundos, esa política enfrenta el siguiente “trilema”: sería factible, en principio, alinear precios relativos y evitar o amortiguar la recesión siempre que se subordinase a esos dos objetivos la meta de reducción inflacionaria; también se podría evitar o amortiguar la recesión y bajar la inflación siempre que la corrección de precios relativos no se considerase una prioridad del mismo orden que las otras dos; finalmente, podría bajarse la inflación y alinearse los precios relativos si se estuviese dispuesto a sacrificar el nivel de actividad y empleo. Lo que no resulta posible, en cambio, es perseguir al mismo tiempo esos tres objetivos (de inflación, actividad y precios relativos) apenas con política monetaria activa pero sin política fiscal consistente y renunciando a la política de ingresos.

La política monetaria puede hacer sólo parte del trabajo absorbiendo liquidez y haciendo que las tasas de interés vuelvan atractivos los activos en pesos, pero no puede hacer todo el trabajo si se quiere evitar profundizar la recesión y afectar el empleo.

Por lo tanto, la política fiscal tiene que acompañar a los instrumentos monetarios. A nuestro juicio, la elección del enfoque gradualista fue correcto. Pero el problema fue que hasta ahora la mayoría de las medidas anunciadas -disminución de retenciones, aumento del mínimo no imponible, de la AUH y las jubilaciones, reconocimiento de la deuda con los jubilados y transferencias a las provincias a cambio de apoyo parlamentario, entre otras- en la práctica impidieron la implementación de ese enfoque y tendieron a afectar su credibilidad. El anuncio de recortes en los subsidios, la principal herramienta disponible aunque políticamente costosa, aún sigue en lo fundamental pendiente y, luego del fracaso de plan inicial del gobierno, envuelto en una fuerte incertidumbre.

Si el gobierno se vio limitado para llevar adelante la política fiscal prevista, la decisión de no convocar a un amplio acuerdo político y social para comprometer a empresarios y sindicalistas en el combate a la inflación fue producto de su propia visión del funcionamiento de la economía. Es verdad que ni la persuasión ni las amenazas sirven para bajar la inflación. Pero también lo es que si se pretende que los formadores de precios y salarios coordinen sus decisiones en función no de la inflación pasada sino de la meta de inflación proyectada, una política de ingresos basada en un acuerdo de esa naturaleza resulta imprescindible.

En un plano más abarcador, una concertación amplia posiblemente resultaría más eficaz que las negociaciones caso por caso ensayadas por el gobierno para reforzar la gobernabilidad y limitar una conflictividad interna que parece en aumento. También para facilitar la obtención de financiamiento externo que permita la corrección gradual del desequilibrio fiscal, así como inversiones directas que contribuyan a modernizar nuestra economía, objetivo que pese a los esfuerzos en el exterior aún no muestra resultados significativos.

Con una política fiscal débil y sin política de ingresos, bajar la inflación se reveló como una tarea mucho más compleja de lo previsto. La fragmentación de las decisiones de política económica resultante del desmembramiento del Ministerio de Economía y la escasa disposición de las autoridades del Banco Central para coordinar sus decisiones con las del Ministro de Economía responsable de la política fiscal, tendió a magnificar esa complejidad.

En síntesis, el gobierno pretendió inicialmente corregir precios relativos y bajar la inflación protegiendo al mismo tiempo el nivel de actividad. ¿Por qué no pudo? El argumento es simple. Si suben el tipo de cambio y las tarifas apelando exclusivamente a la política monetaria, la baja de la inflación demandaría un fuerte descenso del ritmo de aumento en los precios de los bienes no transables. No es casual en este sentido la retórica de este gobierno sobre los “abusos” de subas de precios en supermercados. Pero para que los sectores no transables sean el ancla del nivel de precios hace falta que su demanda se reduzca, lo que rara vez deja invariante al nivel de actividad. Otra opción sería atacar a la inflación removiendo la protección sobre sectores que compiten con las importaciones (como textiles o electrónicos), pero como se ha visto en reiteradas oportunidades esa alternativa no resulta efectiva para frenar los precios de los bienes no transables. Y además, en ese caso los efectos sobre la actividad industrial y el mercado de trabajo también tenderían a ser de magnitud.

El panorama se vuelve aún más complejo por dos razones. Una porque en circunstancias de inflación crónica, ésta tiene un fuerte componente inercial, ya que los contratos salariales y muchos otros contratos (alquileres, etc.) están explícita o implícitamente indexados a la inflación pasada. En otras palabras, una buena parte de la inflación actual es resultado de la inflación pasada. De acuerdo a un trabajo reciente de Roberto Frenkel<sup>1</sup>, en el período 2000-2015 la tasa del mes precedente explica 60% de la tasa de inflación mensual.

---

<sup>1</sup> La inflación en Argentina en los años 2000, 2016, CEDES, mimeo

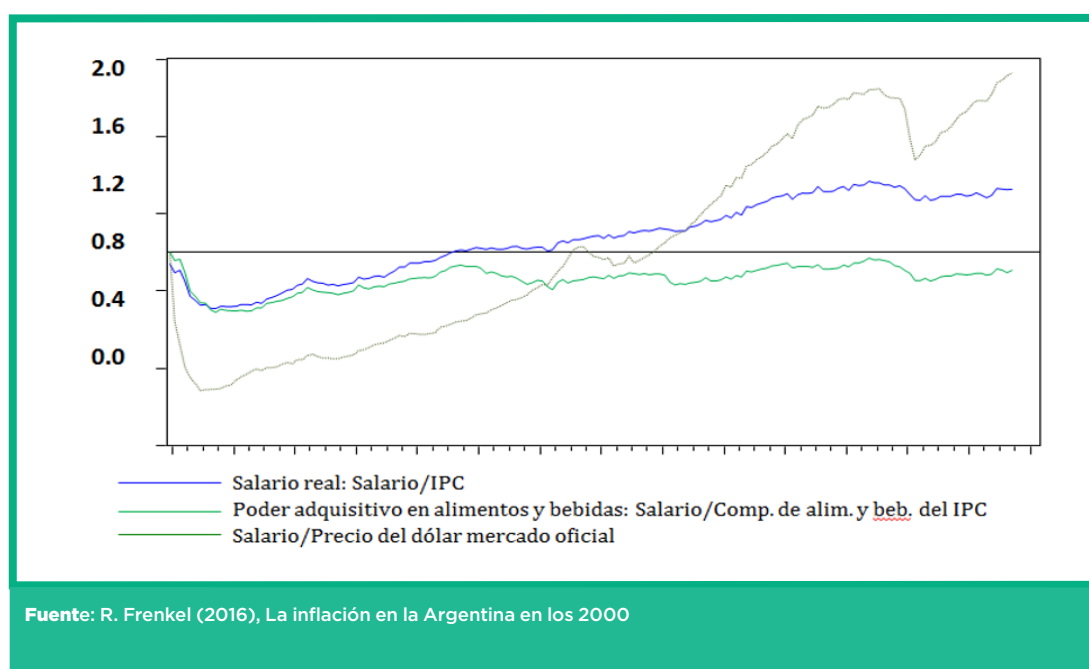
La otra es que, pese a los ajustes en las tarifas de transporte y electricidad, la dominancia fiscal persiste, impulsada por las concesiones que el gobierno se ha visto obligado a aceptar en distintos frentes de negociación (con las provincias y otros actores) o para beneficiar a diferentes sectores vulnerables (como los jubilados), sin tener asegurados los recursos para financiar las erogaciones adicionales.

En suma, la corrección de precios relativos con inflación en baja es un oxímoron. Por esa razón, lo que se ha venido observando hasta ahora es más inflación y menos actividad que las previstas, tal vez con demasiado voluntarismo, por el gobierno. De este modo, la política económica actual se enfrenta a un conflicto de hierro: si no quiere sacrificar el ajuste de precios relativos, deberá aceptar una desaceleración de precios más lenta que lo deseado, o bien se ésta se logrará más rápidamente, pero sólo a costa de acentuar la recesión y la conflictividad social observadas. En cambio, si con el horizonte de las elecciones de medio término a la vista el gobierno insiste en la baja de la inflación pero pretende al mismo tiempo reactivar progresivamente la economía, lo que seguramente veremos será la reaparición del atraso cambiario (que ya ha comenzado a manifestarse) y la renuncia a una corrección tarifaria como la pretendida inicialmente.

## Evolución salarial y economía política del ajuste

Para entender los desafíos de economía política planteados al nuevo gobierno por la dinámica inflacionaria heredada, vale la pena considerar la evolución del salario real, así como de la relación entre salarios nominales, inflación y productividad. **(Gráfico 1).**

Gráfico 1: Salario real, salario en dólares y salario en alimentos y bebidas (2001-2015)



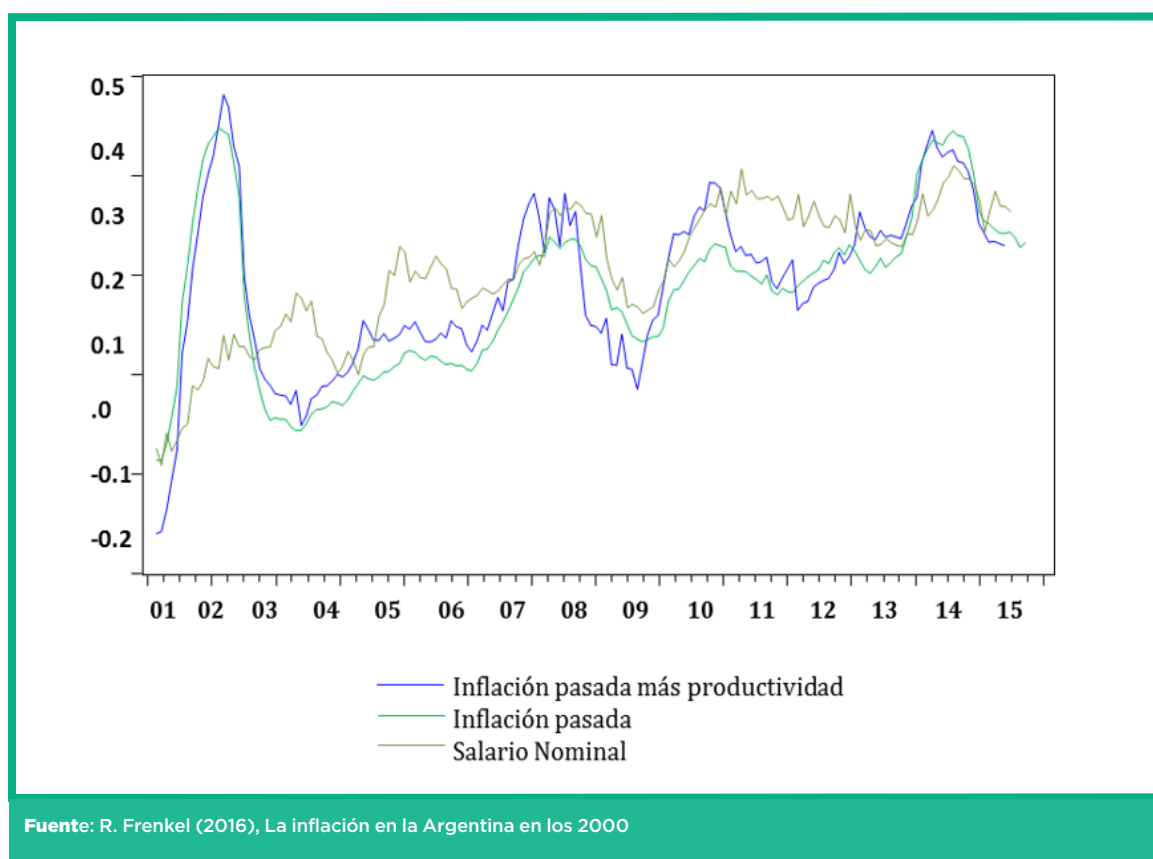
Como se aprecia en el gráfico precedente, a lo largo del período 2001-2015 el salario en dólares creció marcadamente y su nivel, que luego de la crisis de 2001 había quedado muy por debajo del salario real y del poder adquisitivo del salario en alimentos y bebidas, alcanza a éste último a partir de 2008 y al salario real en 2010, distanciándose cada vez más de ambos a partir de entonces. Como resultado de esa trayectoria, el salario en dólares en noviembre de 2015 prácticamente duplica al observado en diciembre de 2001. Aunque menos que el salario en dólares, el salario real en relación a la canasta del IPC también crece significativamente: a fin del período considerado su valor es 39% mayor que el de diciembre de 2001. Pero al mismo tiempo, también puede verse en el gráfico que el salario deflactado por el ítem Alimentos y Bebidas nunca recuperó el nivel de diciembre de 2001. Después de un largo período de bonanza y crecimiento, en 2015 (antes de la devaluación de diciembre) el salario medido en alimentos era nada menos que 10% inferior al de 2001. Este indicador refleja crudamente la precariedad de la situación de los sectores vulnerables o directamente pobres que deben destinar la mayor parte de su ingreso a alimentarse.

La tendencia de estos tres indicadores salariales hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner pone de relieve la complejísima tarea que tenía por delante el nuevo gobierno. La política de estabilización era prácticamente una “misión imposible” (por lo menos a corto plazo) que las autoridades económicas no parecieron percibir en

su real dimensión. Desarmar la “bomba económica” dejada por el gobierno anterior exigía encontrar el modo y la secuencia técnica y políticamente viables para reducir (vía devaluación) el elevadísimo valor alcanzado por el salario en dólares, pero al mismo tiempo evitar el overshooting (disminución exagerada) del salario real y, sobre todo, intentar revertir la pérdida de poder adquisitivo del salario en términos de alimentos y bebidas.

En el siguiente gráfico se observa la evolución mensual de la tasa anual de variación del salario nominal medio, de la tasa anual de variación de la inflación anual rezagada un mes y de la suma de esa variable y la tasa anual de aumento de la productividad del trabajo (calculada como el producto por trabajador ocupado). **(Gráfico 2).**

**Gráfico 2: Tasas anuales del salario, de la inflación pasada y de la suma de la inflación pasada más la productividad**



Es inmediato observar que hasta el año 2013 las tasas anuales del salario medio fueron casi siempre superiores a la tasa de inflación pasada más la tasa de la productividad. Esto quiere decir que el costo laboral unitario (salario nominal medio menos productividad) tendió a crecer sistemáticamente por arriba de la inflación pasada. En consecuencia, entre junio de 2003 y agosto de 2015 el salario real medio tendió a crecer anualmente 3,5 puntos porcentuales más que la productividad del trabajo. Semejante trayectoria resulta claramente insostenible, pero al mismo tiempo es la que quedó incorporada en la memoria colectiva y, en consecuencia, opera como referencia (benchmark) de las demandas de recomposición salarial en el nuevo período.

En síntesis, más allá de la obstrucción de los grupos de la oposición, el gobierno enfrenta una situación económico-social muy seria, que por distintas circunstancias (muchas fuera del alcance de la política gubernamental, algunas fruto de errores de diagnóstico y/o ejecución) siguió deteriorándose al compás de la inflación, la caída de salarios reales, la actividad y el empleo que caracterizaron el primer tramo de su gestión.

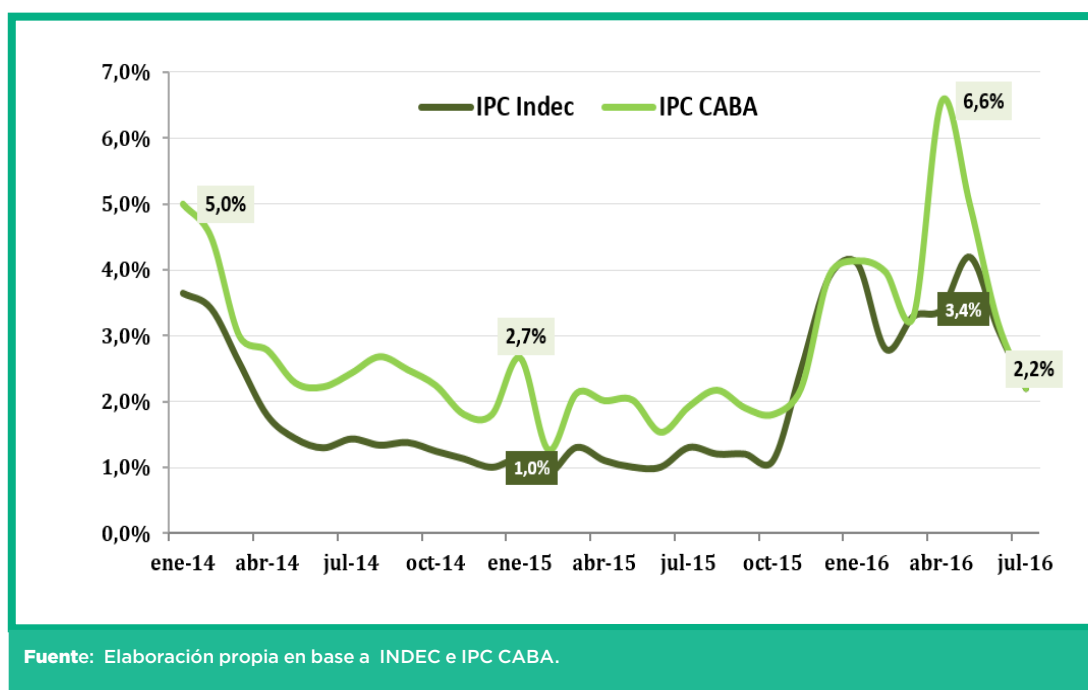
Cierta impaciencia y una creciente conflictividad social que, pese a la significativa aprobación que aún conserva el gobierno, parecen aflorar en la esfera político-social y deben buscarse en esas dos enormes brechas que nos legó el período anterior. Por un lado, la que separa a los sectores de ingresos medios y altos, que se beneficiaron marcadamente por el atraso cambiario y tarifario, de los sectores de menores ingresos, que se perjudicaron severamente por la caída y posterior estancamiento de sus ingresos en relación al precio de los alimentos. Por el otro, la que separa a las expectativas de evolución salarial de los trabajadores sindicalizados (influidas por la experiencia de salarios reales creciendo muy por encima de

la productividad durante más de una década) de las posibilidades reales de una economía empobrecida que no puede seguir aumentando las remuneraciones reales a ritmos muy superiores al crecimiento de la productividad del trabajo.

## La trayectoria de la inflación y el dilema entre estabilización y competitividad

Los índices subnacionales de inflación que utilizamos muestran registros parecidos entre sí. El IPC de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) y el IPC de San Luis (IPCSL), muestran que la inflación se ubica por encima de la meta del 25%, y muy lejos del registro de 2015. El primer índice acumula hasta junio una suba de 26% desde principios de año. La estimación del IPCSL, en tanto, acumula un 22% en la primera mitad del año. En términos interanuales la inflación minorista de lo que va de 2016 se ubica, según el índice considerado, entre el 43% y el 47%. **(Gráfico 3)**

Gráfico 3: Inflación minorista



¿Qué cabe esperar para el resto del año? Aquí solo podemos especular. Si la inflación se estabiliza en un 2% mensual entre julio y diciembre, la tasa anual para 2016 rondará el 43,5%; si se estabiliza en 3%, estará en torno al 47%. Menos probable es que la inflación promedie valores muy altos (4%) o muy bajos (1%); en estos casos la inflación de 2016 sería de 51% o 39%, respectivamente. ¿Qué tendría que ocurrir para que la tasa de inflación de 2016 sea del 25%? Una deflación promedio de 3,2% al mes desde julio hasta diciembre, obviamente quimérica. **(Gráfico 4)**

Un mecanismo que podría operar como ancla de los precios es la estabilización del tipo de cambio. El problema con ese mecanismo es que el éxito en reducir la tasa de inflación se "paga" con pérdida de competitividad. Si entre diciembre y febrero la mayor inflación se asoció a la suba del tipo de cambio, y en consecuencia los precios de los bienes subieron más rápido que los precios de los servicios (los primeros más intensivos en bienes transables), entre marzo y junio ocurrió lo contrario: la inflación en servicios se adelantó y el tipo de cambio tendió a bajar antes que subir. **(Gráfico 5)**

De esta manera se esfumó buena parte de las ganancias de competitividad generadas durante los meses previos (de acuerdo a datos del BCRA 60% si se toma el tipo de cambio real -TCR- con respecto a Estados Unidos; 45% si se toma el TCR multilateral). **(Gráfico 6)**

Gráfico 4: Proyecciones para la inflación minorista

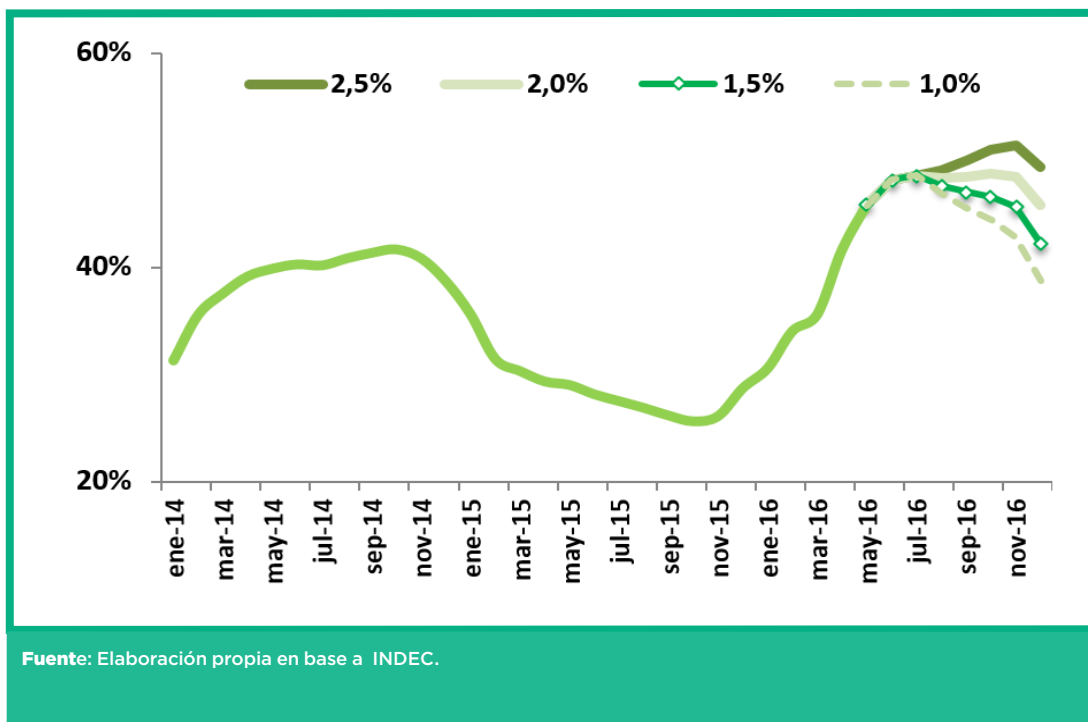


Gráfico 5: Evolución de la inflación de bienes (transables) y servicios (no transables)

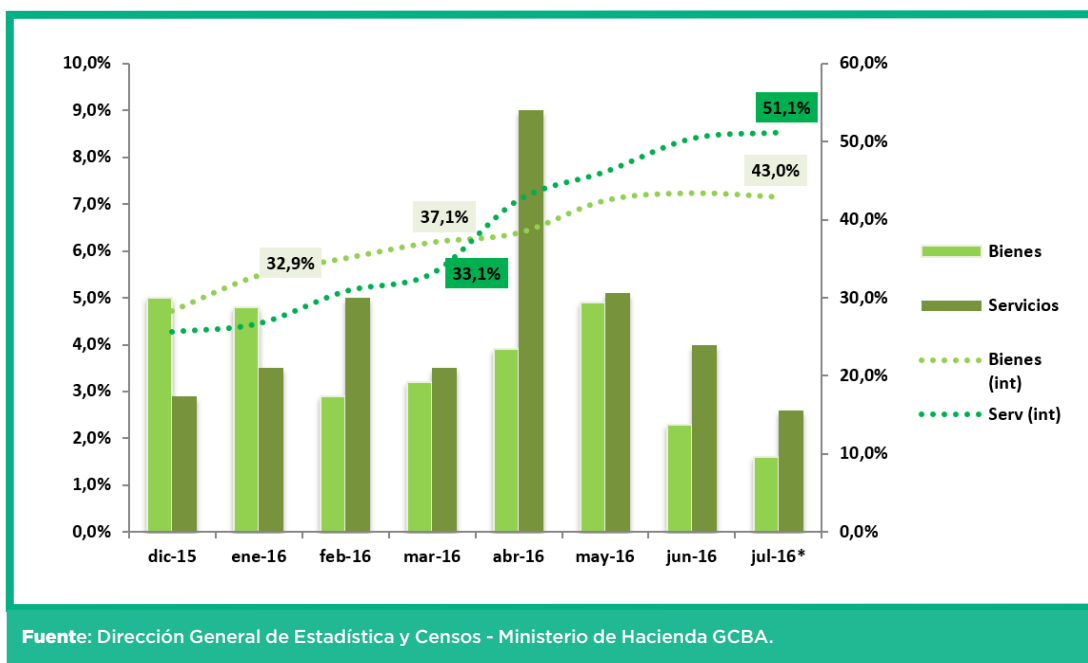
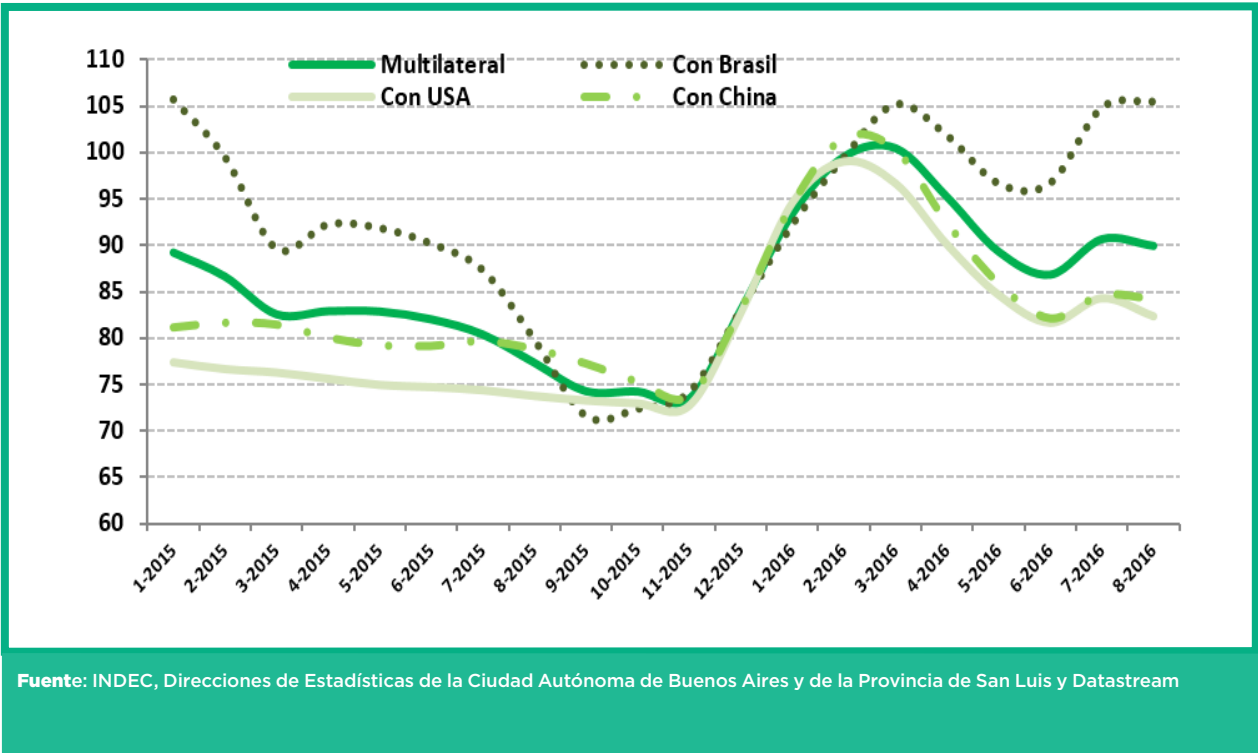
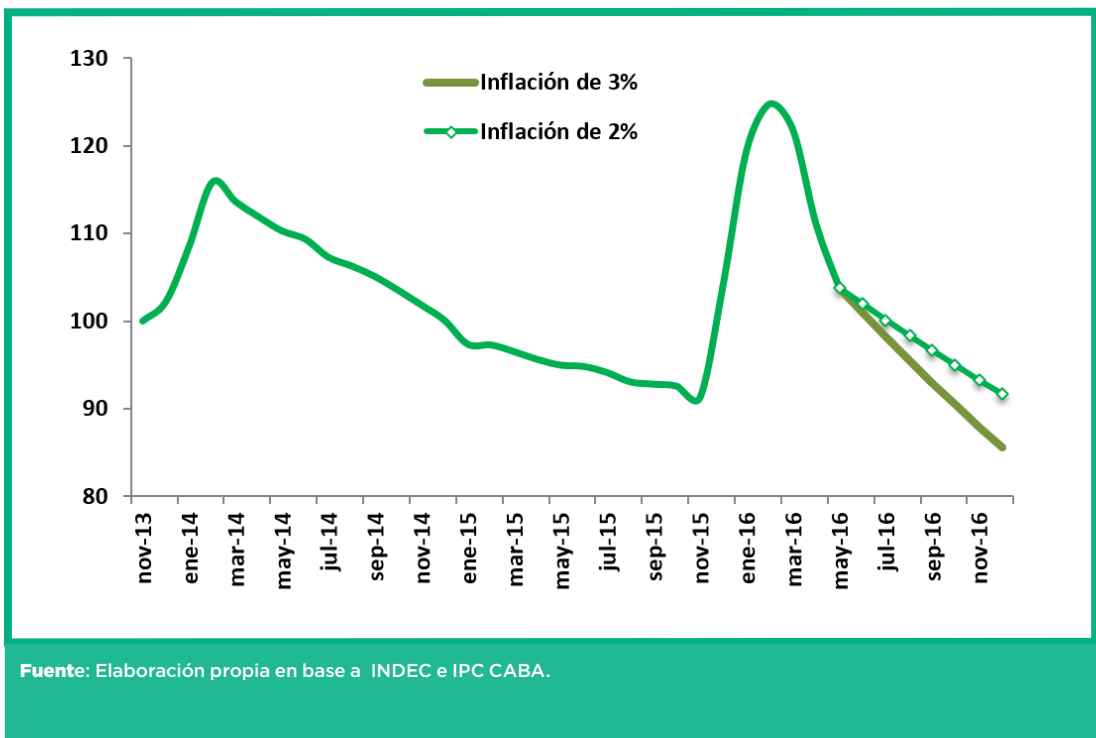


Gráfico 6: Evolución del tipo de cambio real (promedio enero 1997-julio 2016=100)



Si la inflación que observamos de aquí en más coincidiera con el mantenimiento de un tipo de cambio nominal estable, llegaríamos a diciembre de 2016 con un TCR similar al de noviembre de 2015 (y al de la Convertibilidad).

Evolución del tipo de cambio real frente a distintos escenarios de inflación minorista (noviembre 2013=100)





## ¿Cómo seguir?

Dado que la inflación sigue manteniendo, por el momento y pese al registro de agosto, un piso tendencial de 2% mensual (que además no está consolidado teniendo en cuenta que habrá que incorporar un nuevo ajuste de tarifas en reemplazo del "que no fue" y demandas paritarias con base en la inflación pasada) todo sugiere que si el gobierno no encuentra rápido la forma de lidiar con la creciente impaciencia ante la "estanflación" se verá tentado a desandar parte del camino de los primeros meses y transitar una nueva etapa de atraso cambiario.

Este camino resulta muy seductor. Y más aún con elecciones de medio término cruciales para el nuevo gobierno en el horizonte, que plantean una economía política muy difícil de abordar. La combinación de esa tentación con la de mercados internacionales a la búsqueda de nuevas oportunidades en un escenario global poco atractivo puede resultar negativa para el país si, como tantas veces, prevalece el "cortoplacismo", es decir, el intento de resolver las urgencias inmediatas sin atender a la sostenibilidad futura de la economía.

Aunque la inversión extranjera directa demore en concretarse, la oportunidad de un mayor endeudamiento puede llegar aunque la inflación permanezca elevada, el déficit fiscal subsista y reaparezca el atraso cambiario. Además de los recursos de argentinos que ingresen por el blanqueo, el giro hacia los mercados que representa el gobierno de Mauricio Macri en el contexto de la región puede llegar a pesar más que una desapasionada evaluación del riesgo basada en el estado de salud de la macroeconomía argentina.

En este contexto, el escenario más probable para el año próximo parece ser el de continuidad de una política fiscal "pasiva" y por ende de dominancia fiscal, y, a falta de otras opciones factibles, el mantenimiento del mecanismo de atraso cambiario y la realización de ajustes tarifarios inferiores a los originalmente previstos, para moderar las demandas salariales de las futuras paritarias y consolidar la desaceleración del ritmo de inflación.

En este marco la inflación del 2017 será seguramente inferior a la de este año, pero superior a la meta del 17% que se fijó el Banco Central. En un contexto internacional poco favorable y con una incertidumbre aún significativa sobre las perspectivas de consolidación del gobierno que seguramente postergará el comienzo de los flujos de IED y la recuperación de la tasa de inversión, especialmente en un año dominado políticamente por las elecciones parlamentarias de medio término y posiblemente complicado por una creciente conflictividad social, el escenario más probable en materia de actividad es el de un crecimiento del orden de un modesto 2% anual, impulsado por la gradual recuperación del consumo (contrapartida del atraso cambiario). Este desempeño está lejos de las proyecciones más entusiastas que sugerían tasas del orden del 4 ó 5%, pero representa sin duda un bienvenido cambio de tendencia en relación a 2016.

Este gobierno tiene, sin embargo, las condiciones para plantearse un escenario algo más ambicioso, donde los objetivos de recuperar la actividad y bajar gradualmente la inflación no choquen con el de mantener un conjunto de precios relativos que asegure la competitividad de la economía a mediano y largo plazo,

En lo inmediato, para ello hacen falta tres cosas. En el plano "técnico", reformular el diagnóstico de los determinantes de la dinámica inflacionaria y definir un mix de política monetaria, fiscal y de ingresos consistente con ese diagnóstico. En el funcionamiento del Ejecutivo, superar la fragmentación, sectorialización y falta de coordinación de la política económica. En el plano político, finalmente, revisar la estrategia de negociación caso por caso y procurar acuerdos más amplios y de mayor horizonte para consolidar la base de apoyo a las políticas del gobierno y despejar las incertidumbres sobre su viabilidad.

A mediano plazo, una vez superadas las urgencias de la coyuntura, ¿cómo evitar que se reproduzca el ciclo de euforia y depresión propio de todas nuestras recuperaciones anteriores? No hay una receta mágica, pero hay algo de lo que aún no se habla: lo que nos debemos es ni más ni menos que una estrategia de desarrollo sostenido e inclusivo, debatida entre todos los actores, con eje en una inserción internacional acorde a nuestros intereses y en una transformación productiva basada en la ampliación y mejora de nuestra infraestructura, en la acumulación de capital físico y humano y en el impulso a la innovación. Sin esa estrategia, que haga de los aumentos de productividad la base de nuestra competitividad, no habrá empleo de calidad, crecimiento sostenido ni equidad distributiva sostenible.

## Acerca del autor

La opinión del autor no refleja necesariamente la posición de todos los miembros de CIPPEC en el tema analizado.

**Guillermo Rozenwurcel:** Economista, Licenciado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Master por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC/RJ) y Doctor (candidato) por la UBA. Actualmente es Investigador Principal del CONICET, donde ingresó en 1989 e Investigador Visitante del CEDES -Centro de Estudios de Estado y Sociedad. También se desempeña como Director Ejecutivo del Centro de IDEAS (Investigaciones sobre Desarrollo Económico de América del Sur) de la Universidad de San Martín (UNSAM). Ejerce la docencia como Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en la Escuela de Política y Gobierno de la UNSAM. Fue Secretario del Estado para la Pequeña y Mediana Empresa en 1999-2000 y Vice Jefe de Asesores del Ministerio de Economía de la República Argentina en 2000-2001. Ha sido en diversas oportunidades consultor económico de CEPAL, PNUD, OIT, BID, el Banco Mundial y otras instituciones internacionales. Es autor de varios libros y numerosos artículos publicados en revistas académicas del país y el exterior. Fue expositor en múltiples conferencias, seminarios y foros nacionales, regionales e internacionales y como profesor invitado dictó cursos de posgrado en el CEMLA (Centro de Estudios Monetarios en Latino América) y en distintas universidades e instituciones de formación de posgrado de Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, España y Venezuela, entre otros países. Sus principales áreas de interés son: Macroeconomía, Dinero y sistema Financiero, Política Económica, Macroeconomía del Desarrollo y Regímenes Económicos Latinoamericanos.

Las publicaciones de CIPPEC son gratuitas y se pueden descargar en [www.cippec.org](http://www.cippec.org) CIPPEC alienta el uso y la divulgación de sus producciones sin fines comerciales.

Si desea citar este documento: Rozenwurcel, G (Septiembre de 2016). Informe de coyuntura. **Documento de Desarrollo Económico**. Buenos Aires: CIPPEC. Para uso online agradecemos usar el hipervínculo al documento original en la web de CIPPEC.

**CIPPEC** (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) es una organización independiente, apartidaria y sin fines de lucro que trabaja por un Estado justo, democrático y eficiente que mejore la vida de las personas. Para ello concentra sus esfuerzos en analizar y promover políticas públicas que fomenten la equidad y el crecimiento en la Argentina. Su desafío es traducir en acciones concretas las mejores ideas que surjan en las áreas de **Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Estado y Gobierno** a través de los programas de Educación, Salud, Protección Social, Política Fiscal, Integración Global, Justicia y Transparencia, Instituciones Políticas, Gestión Pública, Incidencia, Monitoreo y Evaluación, y Ciudades.